



“Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA PONENTE
ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, quince de agosto de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05001-31-03-009-2018-00336-01 conexo al 05001-31-03-009-2016-00450-02
Proceso	Ejecutivo
Demandante	Iván Darío Ramírez Valenzuela
Demandados	Eduin Robinson Zapata Acevedo y otra
Procedencia	Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Sinopsis	La prescripción de la acción cambiaria se configura luego de transcurridos tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento del pagaré, y no desde la fecha en que el acreedor, pudo acelerar dicho vencimiento. Las excepciones derivadas del negocio causal solo pueden oponerse contra la parte que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.
Aprobación.	Proyecto aprobado en sesión virtual del día 14 de agosto de 2023.
Rdo. Interno	048-21
Sentencia n°	040-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 05 de mayo de 2021, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por el señor IVÁN DARÍO RAMÍREZ VALENZUELA en contra de los señores EDUIN ROBINSON ZAPATA ACEVEDO y CINTHYA GUZMÁN PINZÓN.

1. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

El 24 de mayo de 2016, formuló el señor IVÁN DARÍO RAMÍREZ VALENZUELA demanda ejecutiva, en contra de los señores EDUIN ROBINSON ZAPATA ACEVEDO y CINTHYA GUZMÁN PINZÓN, la cual fue radicada con el No. 05001

31 03 009 2016 00450 00, fundamentada en los siguientes supuestos fácticos (Fol. 1 a 17/Archivo 01 expediente principal/Expediente recibido) y 1 a 10/Archivo 02 *ibídem*):

Los demandados suscribieron a favor del señor RAFAEL IGNACIO VALENZUELA JARAMILLO, el pagaré 78481525, por la suma de \$100.000.000, más los intereses de plazo, a una tasa del 2% mes vencido y los moratorios a la tasa máxima legal permitida, que se causaran sobre el mismo, con fecha de vencimiento del 30 de mayo de 2014, así como la respectiva carta de instrucciones.

El citado acreedor le cedió al señor IVÁN DARÍO VALENZUELA RAMÍREZ, el 30 de abril de 2014, encontrándose el plazo para el pago de la obligación vencido y los deudores en mora de cancelar los intereses de plazo desde el 22 de diciembre de 2011 y los moratorios desde el 30 de mayo de 2014.

En consecuencia, solicitó el demandante se librara mandamiento de pago por el capital incorporado en dicho título; más los intereses de plazo a la tasa pactada del 2% mensual desde el 22 de diciembre de 2011, hasta el 29 de mayo de 2014; y por intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida para cada período, desde el 30 de mayo de 2014, hasta el pago total de la obligación.

Luego, el mismo demandante presentó demanda ejecutiva conexa, el 12 de julio de 2018, en contra de los mismos accionados, soportada en los siguientes hechos (Pág. 2 a 40/Archivo 01):

El señor RAFAEL IGNACIO VALENZUELA JARAMILLO, a través de apoderado general, endosó al señor IVÁN DARÍO VALENZUELA RAMÍREZ, pagarés identificados con los Nos. 78491525, 78491526, 78491527, 78491528, 78491529, 78491530, 78491531, 78491532, 78491533, 78491535 y 78491536, todos con fecha de creación del 22 de diciembre de 2011, cada uno por valor de \$100.000.000, para un total de \$1.100.000.000.

Dichos pagarés fueron entregados por el endosante al endosatario con la carta de instrucciones correspondiente a cada uno de ellos, por lo que se presentan para el cobro a fin de que se acumulen a la inicialmente formulada, dado que los deudores no han cancelado su importe, ni los intereses acordados.

Acorde con lo anterior, solicitó se librara mandamiento ejecutivo a su favor y a cargo de los deudores, para el pago del capital de los pagarés Nos. 78491526, 78491527, 78491528, 78491529, 78491530, 78491531, 78491532, 78491533, esto es, \$100.000.000, cada uno, para un total de \$800.000.000, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, causados desde el 22 de diciembre de 2011, hasta el pago total de la obligación.

Además, en ambas demandas solicitó se condenara a los demandados al pago de las costas.

1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO

El juzgador de primera instancia libró orden ejecutiva por el capital incorporado en cada uno de los pagarés adunados para el cobro y los intereses a la tasa y por el plazo solicitado, en proveído del 22 de junio de 2016, en la demanda principal (Pag. 11/Archivo 02 del expediente principal/ Expediente remitido) y el 18 de julio de 2018, en la demanda conexa (Pág. 41 a 43/Archivo 01).

1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.

Notificados los demandados, por intermedio de apoderada judicial debidamente constituida se pronunciaron, frente a los hechos y pretensiones de la demanda así (Pág. 11 a 16 y 41 a 48/Expediente físico. Parte 3/Archivo).

1.3.1. Frente a la demanda principal. Propusieron similares excepciones, bajo los mismos argumentos, aunque en diferentes fechas, las que nominaron:

1.3.1.1. Prescripción del pagaré No. 78491525. La que soportó en que la fecha de vencimiento que figuraban en este título, no era cierta, a pesar de haber sido llenada por el demandante conforme a las instrucciones entregadas; sin embargo, se advierte que en los hechos de la demanda se afirma que los demandados adeudan intereses remuneratorios desde el 22 de diciembre de 2011, es decir, hace más de cinco años y, en el referido título se pactó la “CLÁUSULA ACELERATORIA”, con la cual el demandante podía declarar vencido el plazo otorgado para el pago de la obligación y por tanto, la fecha de incumplimiento no

sería desde la fecha que se anotó en el pagaré, sino desde que el demandado dejó de pagar, esto es, 22 de diciembre de 2011, como viene de señalarse, que contabilizando el tiempo desde este momento hasta la presentación de la demanda (26 de mayo de 2016), transcurrieron más de los tres años que se contemplan para la configuración de la prescripción.

La codemandada **Cintha Guzmán Pinzón**, adicionó que el mandamiento de pago se había notificado por estados el 23 de junio de 2016, sin que la demandada fuera notificada dentro del año siguiente, pues dicha diligencia se cumplió el 18 de octubre de 2017.

1.3.1.2. Inexistencia del mutuo con interés como negocio causal. Conforme a lo señalado en el reverso del pagaré, el mismo respaldaba lo establecido en la cláusula tercera literal E, del contrato de promesa de compraventa celebrado entre los deudores y el acreedor inicial y por tanto, no se derivó de un préstamo o contrato de mutuo, por lo que en el evento de que no se hubiera cumplido alguna de las cláusulas de aquel contrato, lo procedente era solicitar el cumplimiento o la resolución de dicho negocio, a través de un proceso verbal; además, que en este caso, quien había incumplido la promesa había sido el vendedor.

1.3.1.3. Nulidad del contrato que dio lugar a la firma del pagaré. Inexistencia de las obligaciones derivadas del negocio. Arguyendo que en la promesa no se había indicado el año en que se efectuaría la escritura de venta, pues solo se relacionó “el día 22 de diciembre, a las 3 p.m.

1.3.1.4. Incumplimiento del contrato que dio lugar a la firma del pagaré. Afirmando que la promesa se había incumplido por el vendedor, dado que, como parte del precio del lote, se había acordado la entrega de apartamentos por valor de \$900.000.000, que fueran construidos sobre ese terreno, pero no dieron la licencia de construcción.

1.3.2. Frente a la demanda conexa. Formularon las siguientes excepciones de mérito (Pág. 62 a 68/Archivo 01):

1.3.2.1. Prescripción de la acción cambiaria de los pagarés Nos. 78491526, 78491527, 78491528, 78491529, 78491530, 78491531, 78491532, 78491533. Arguyendo que, según la carta de instrucciones, la fecha de vencimiento correspondería a la fecha en que fuera diligenciado el pagaré, lo que se desconoce, teniéndose certeza únicamente de la fecha en que fue suscrita la carta de instrucciones que fue el 22 de diciembre de 2011, por lo que para el momento en que se presentó la demanda ya habían transcurrido los tres (3) años que contempla el artículo 622 del Código de Comercio para que opere el fenómeno de la prescripción de la acción cambiaria.

1.3.2.2. Prescripción de los intereses cobrados desde el 22 de diciembre de 2011. Indicando que los intereses causados cada mes, se encuentran prescritos a partir del cumplimiento de los tres (3) años a los que se refiere la norma comercial antes citada.

1.3.2.3. Inexistencia del contrato de mutuo con interés como negocio causal; nulidad e incumplimiento del contrato de promesa de compraventa. Reiterándose los argumentos esbozados para soportar las excepciones con la misma denominación formuladas frente a la demanda principal.

1.3.2.4. Inexistencia de las obligaciones en los once pagarés base de cobro. Insistiendo que no se firmaron dichos títulos para garantizar el pago de los dineros derivados de un contrato de mutuo, sino de obligaciones de hacer, conforme lo contenido en la promesa de compraventa.

Mediante auto del 26 de enero de 2021, se precisó por el Juzgado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 547 numeral 1° del Código General del Proceso, el presente asunto continuaba solo contra el codeudor EDUIN ROBINSON ZAPATA, ante el silencio de la parte demandante frente al requerimiento realizado por auto del 02 de diciembre de 2020, para que informara si pretendía continuar el asunto en contra de la codemandada CINTHYA GUZMAN PINZON, dada la admisión del trámite de reorganización de deudas respecto de la misma (Archivo 04, 05 y 10).

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplidas las ritualidades propias para esta clase de asuntos, conforme las previsiones de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en audiencia llevada a cabo el 21 de abril de 2021, profirió la decisión que selló la primera instancia, desestimando las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, ordenando seguir adelante la ejecución conforme lo dispuesto en los mandamientos de pago (principal y acumulación) y condenando en costas a la parte vencida (Archivo 16 a 16.04).

1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

En el mismo acto de la audiencia la vocera judicial del demandado propuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, sustentándolo dentro de los tres días siguientes a su finalización, en los siguientes términos (Archivo 17):

- Insiste en que se configuró la prescripción de la acción cambiaria de todos los pagarés objeto de recaudo, tanto de la demanda principal, como de la conexa, con los mismos argumentos esbozados al momento de formular esta excepción; esto es, que no le era dable a la parte demandante el llenar el espacio destinado a la fecha de vencimiento a su amaño, para evitar dicha figura, sino que estando establecida la cláusula aceleratoria, podía hacerse efectiva la acción desde la fecha en que los deudores incurrieron en mora, esto es, 22 de diciembre de 2011; además, que esta fecha coincidía con la elaboración de la carta de instrucciones, la cual indicaba que la fecha de vencimiento sería aquélla en la que se diligenciaran los espacios en blanco de pagaré, por lo que debió el acreedor haber anotado como tal, la referida fecha, por ser la única respecto de la cual se tiene certeza.
- Respecto al argumento planteado en la sentencia que se repara, con relación a que las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, eran procedentes contra cualquier demandante, siempre y cuando, éste no fuera tenedor de buena fe, exenta de culpa, aduciendo que esta condición se cumplía en este caso y, por ende, podía oponerse todas las excepciones relacionadas con el negocio causal.

Afirmó que el ejecutante era conocedor que los pagarés estaban firmados a favor de su primo RAFAEL IGNACIO VALENZUELA, así como su origen, pues en el mismo cuerpo de los títulos estaban anotadas las obligaciones que respaldaban éstos, y aun así en el interrogatorio había negado conocer dicho negocio, con lo cual se probó la mala fe que se exige para poder alegar cualquier excepción, máxime si se considera el monto y tipo de negocio.

2. CONSIDERACIONES.

2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo singular, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.2. PROCESOS EJECUTIVOS. Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art. 422 del C. G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentó un (1) pagaré, en la demanda principal, ocho (8) en la demanda de acumulación, respecto de los cuales adujo el deudor la prescripción y en su defecto, que el tenedor no lo era de buena fe exenta de culpa, por lo que podían oponérsele las excepciones derivadas del negocio causal, como lo era la nulidad de la promesa de compraventa que originó dichos títulos, el incumplimiento por parte del promitente vendedor y la inexistencia de las obligaciones contenidas en los mismos.

2.3. LA APELACIÓN. La parte demandada, ante la falta de prosperidad de los mecanismos de defensa propuestos en contra de la ejecución y la orden de seguir adelante la ejecución, dispuestos por el juez *ad quo*, presentó recurso de alzada, reiterando, la configuración de la prescripción de la acción cambiaria para el cobro de todos los títulos pretendidos, así como la mala fe del tenedor demandante.

Sobre los reparos, es preciso hacer las siguientes precisiones:

2.3.1. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. Insiste el impugnante que no le era dable al demandante llenar los espacios en blanco a su antojo, para efectos de evitar que se configurara este fenómeno.

Al respecto tenemos, que efectivamente como quedó acreditado y reconocido al interior de este asunto, en los pagarés allegados como base de recaudo, al momento de su suscripción se dejaron espacios en blanco para ser llenados conforme a la carta de instrucciones que se firmó para cada uno de ellos, las cuales fueron acompañadas a la demanda. En éstas se indicó para tal efecto:

“4. La fecha de vencimiento será la misma en que sea llenado el documento adjunto, y serán exigibles inmediatamente todas las obligaciones en él contenidas a mi cargo y sin necesidad que se me requiera judicial o extrajudicialmente para su cumplimiento.”

Es decir, que en el momento en que se pretendiera el cobro de las obligaciones contenidas en el respectivo título, debía imponerse sobre el mismo la fecha en que fuera llenado, como fecha de vencimiento.

Ahora, arguye la parte demandada que no podía ser la fecha que figura en los pagarés, aunque reconoce no tener certeza en la cual fueron llenados, pero que, teniendo el acreedor la facultad de acelerar el plazo, conforme lo indicado en la parte final del numeral antes transcrito de la carta de instrucciones, que reza: *“Además por el hecho de ser utilizado el pagaré adjunto, señor RAFAEL IGNACIO VALENZUELA JARAMILLO, podrá declarar de plazo vencido todas y cada una de las obligaciones a mi cargo, aun” cuando respecto de ellas se hubiere pactado un plazo para su exigibilidad*” –resalto intencional-; debió anotar como fecha de vencimiento la fecha en que los deudores habían incurrido en mora, que había sido

el 22 de diciembre de 2011, lo que se verificaba con la solicitud de que se ordenaran intereses a partir de esta fecha.

Sin embargo, debe precisarse que tal como lo reconoce el mismo demandado, la cláusula aceleratoria es una potestad que se otorga al acreedor, quien puede optar por hacer uso o no de ella. En este caso, efectivamente estaba facultado el acreedor para acelerar el vencimiento de las obligaciones desde la misma fecha en que los deudores incumplieron la obligación de pagar intereses moratorios, pero no era una obligación hacerlo, quien escogió hacerlo con posterioridad, lo que no contraría las instrucciones dadas, por cuanto en ellas se indicó que sería diligenciado ese espacio con la fecha en que fuera llenado.

Por tanto, tampoco resulta admisible que tuviera el acreedor que relacionar como fecha de vencimiento la de elaboración de la carta de instrucciones, pues no fue la directriz indicada en esta para tal efecto, por lo que, de hacerse en dichos términos, sí desatendería lo ordenado por el mismo deudor, lo que legalmente no le está permitido.

Así las cosas, tenemos que era dable al acreedor llenar los espacios en blanco conforme a las instrucciones recibidas, y con la fecha que se plasmó, es decir la del momento en que se completaron los espacios faltantes.

Ello da lugar a entender que no se configuró la prescripción, como quedó establecido en la sentencia de primera instancia, pues con la demanda se logró interrumpir tal fenómeno.

2.3.2. TENEDOR DE MALA FE EXENTA DE CULPA. Establece el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, que pueden formularse las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra cualquier demandante, aunque no haya sido parte en el respectivo negocio **cuando éste no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.**

En nuestra legislación la buena fe se presume, lo que se reitera en materia comercial, al establecerse de manera expresa en el artículo 835 del Código de Comercio:

“Se presumirá la buena fe, aun la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo.”

En este caso, se afirma por el recurrente que dado el parentesco existente entre el endosante y el endosatario (primos), debía tenerse por sentado que este conocía de la existencia del negocio causal celebrado entre aquel y los deudores; sin embargo, dentro del plenario no obra prueba destinada a la acreditación de tal circunstancia, y si bien en el interrogatorio que le fue practicado al demandante, se procuró una confesión en este sentido, no logró obtenerse, pues este, de manera clara, precisa y elocuente, señaló no conocer las circunstancias o condiciones en las que se había celebrado la promesa de compraventa que originó los pagarés objeto de recaudo.

Sobre esto tiene la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“La buena fe (...) es la creencia en el poseedor de ser propietario de la cosa. [De esa manera], el precepto [art. 768 C.C.] (...) concluye que 'en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato'. Entonces, para que un adquirente a non domino sea de buena fe, es necesario que haya creído que su autor era propietario, pues no podría recibir de él un derecho de que no fuese titular. (CSJ SC de 16 abr. 2008, rad. 2000-00050-01, y SC de 7 jul. 2011, rad. 2000-00121- 01). Entonces, de la interpretación sistemática de las referidas disposiciones se extrae que, para calificar si el poseedor es regular o no, basta escudriñar si inició su aprehensión bajo la convicción de propietario, aun cuando a la postre descubra que no lo es, ya sea por motivos ajenos a él o porque siéndole imputables no desdicen de su persuasión en aquella época.”¹

¹ Sentencia SC4791 del 07 de diciembre de 2020. M.P. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVE. Expediente 11001-31-03-001-2011-00495-01.

En este caso, no se arrimaron pruebas que permitieran establecer que el demandante hubiese adquirido los títulos con la intención o procurando algún fraude, para efectos de derivar consecuencias adversas a los derechos incorporados en los títulos cuyo recaudo pretende, y la parte apelante sólo alude a suposiciones y conjeturas al afirmar que dada la cuantía y relación parental de quienes intervinieron en la cesión, quien los adquirió debía conocer de lo pactado en el negocio y lo sucedido con el mismo, pero no logró acreditar tales manifestaciones.

Por tanto, no era dable proponer frente al demandante las excepciones de mérito derivadas del negocio causal, ya que no se logró demostrar que fuera un tenedor de los títulos de mala fe, o mejor que no era de buena fe exenta de culpa.

3. CONCLUSIÓN.

Corolario de lo desarrollado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por la parte apelante no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, el 5 de mayo de 2021, dentro del proceso EJECUTIVO singular instaurado por el señor IVÁN DARÍO VALENZUELA RAMÍREZ, en contra del señor EDUIN ROBINSON ZAPATA ACEVEDO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte apelante. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, esto es, DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL

SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$2.601.212). Liquídense en primera instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente híbrido a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

NATTAN NISIMBLAT MURILLO
Magistrado

Firmado Por:

Alba Lucia Goyeneche Guevara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Nattan Nisimblat Murillo

Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **92c5d043c589d0555f9950ea8244e643d471e46dd5e9b99d19a9e3f3455d0778**

Documento generado en 15/08/2023 10:08:50 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>